

Evolución de las diversas formas de pobreza en México*

Julio Boltvink

¿Cuál sería el proyecto de desarrollo social para México?, ¿Qué recomendaríamos que los partidos de oposición plantearan en términos de política social? Para ubicar este tema presento una síntesis de investigaciones que desde hace 20 años he venido haciendo sobre la pobreza en México y que, para mí, develan el hilo central de lo que debe ser una política social nacional.

* Este trabajo fue presentado como ponencia en el "Primer Congreso de Economía en Michoacán. El Desarrollo Socioeconómico en México: perspectivas para el Siglo XXI", realizado en la ciudad de Morelia, Mich., a principios de junio del 2000 y su publicación en esta revista cuenta con la autorización del autor. El evento fue organizado por la Escuela de Economía, dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. (Nota del coordinador)

En el Cuadro 1 se presenta la evolución, en el período 1970-1995, de diversos tipos o formas de pobreza en México. Hablo de "pobrezas" y no sólo de "la pobreza" porque en cada uno de los campos de la vida humana en los que hay carencias en necesidades que requieren recursos "materiales" para su satisfacción se presenta una pobreza específica. Acoto el significado de pobreza a las necesidades que requieren este tipo de recursos porque si incluyéramos también necesidades como el afecto o la creatividad, correríamos el riesgo de incluir como pobres algunos de los multimillonarios mexicanos de la lista de Forbes, con lo cual nuestro concepto perdería toda su capacidad de distinguir y se volvería inútil. No toda carencia humana, no todo sufrimiento humano, constituye pobreza.

Pero respecto a las personas que no saben leer ni escribir, o que no terminaron la primaria o la secundaria, sí podemos hablar de pobreza educativa. Si no se tiene una adecuada atención a la salud, podemos hablar de pobreza de salud. Si no se tienen cubiertos los riesgos de vejez, invalidez, orfandad, viudez, podemos hablar de pobreza de seguridad social.

En el Cuadro 1 se presenta la evolución en el período 1970-1995 de los siguientes tipos de pobrezas: a) educativa; b) de vivienda y servicios; c) de salud y seguridad social; d) de ingresos; y e) de tiempo libre y f) pobreza integrada, calculada por el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP).

La pobreza educativa se mide, básicamente, como la población que no tiene la secundaria completa, pero se incluye también la inasistencia escolar de los menores de edad: la población en edad escolar que debiera estar asistiendo a la escuela y no lo hace. El promedio ponderado de las pobrezas de adultos y menores sirve de síntesis de la pobreza educativa.

En 1970 el 53.6% de los mexicanos mayores de 7 años vivía en la pobreza educativa, la cual baja para 1980 al 33%, una reducción de 20 puntos en sólo 10 años, la cual, como lo muestra el Cuadro, significa una tasa media anual de -4.5%. De 1980 a 1990 pasa de 33 a 28, baja sólo 5 puntos, una tasa media anual mucho más baja que en el período anterior, de -1.6%, pero sigue bajando.

De 1990 a 1995 baja hasta el 22%, en sólo 5 años hay una baja 6 puntos, es decir en la primera parte de los años noventa baja a una tasa de -4.6%, ligeramente más rápido que en el primer período, lo que significa que la desaceleración en la baja de la pobreza educativa observada en los años ochenta, desaparece en la primera mitad de los años noventa.

Cuadro 1
Síntesis de las trayectorias de las pobrezas específicas y de ingresos
(% de la población nacional)

Concepto	1970	1980	1990	1995	tasas medias anuales		
					70-80	80-90	90-95
1. Indigencia Educativa Adultos	31.6	16.1	13.7	10.4	-6.6	-1.6	-5.4
2. Pobreza Extrema Educativa Adultos (sin indigencia)	38.9	32.1	23.3	21	-3.7	-2.8	-3.1
3. Pobreza moderada Educativa Adultos (sin pobreza extrema)	20.6	27.9	25.8	24	-1.8	-1.9	-2.4
4. Media ponderada de las pobrezas educativas de adultos	62.2	43.8	35.0	30	-3.4	-2.2	-3
5. Pobreza Educativa Menores (Inasistencia escolar a primaria)	36.1	33.5	13.1	6.4	-9.4	-0.3	-13.3
6. Pobreza educativa promedio ponderado (adultos y menores)	53.6	33.8	28.0	22.1	-4.5	-1.8	-4.6
7. Pobreza de espacio habitacional (sobrecupo en % de personas)	43.31	27.23	21.91	17.76	-4.5	-2.2	-4.1
8. Indigencia servicios de la vivienda (ningún servicio en la norma)	35.8	19.1	10.7	5.9	-6.1	-5.6	-11.5
9. Pobreza extrema servicios de la vivienda (c/ un servicio)	20.4	20.4	23.2	20.3	-3.4	-1.5	-5.2
10. Pobreza moderada servicios de la vivienda (c/ dos servicios)	12.6	20.6	20.8	22.2	-1.3	-1.0	-2.5
11. Pobreza de servicios (media ponderada)	53.7	39.6	33.0	26.7	-3.0	-1.8	-4.1
12. pobreza de vivienda y servicios (media simple)	48.5	33.4	27.5	22.2	-3.7	-1.9	-4.2
	1970	1981	1989	1996	70-81	81-89	89-95
13. Pobreza de seguridad social	74.3	50.9	41.5	50.8	-3.4	-2.5	3.4
14. Pobreza de servicios de salud	58.9 (1978)	46.4	39.9	37.0	-6.3 (78-82)	-2.4	-1.5
15. Pobrezas de salud y seguridad social (media simple)	66.15	49.7	41	43.9	-2.9	-1.9	1.4
16. Pobreza por Ingresos (incidencia)	72.6 (1988)	48.5	64	66.0 (1994)	-3.1	3.5	0.6 (89-94)
17. Pobreza de tiempo (incidencia)	n.d.	40.6 (1984)	39.1	41.8 (1992)	n.d.	-0.8 (84-89)	2.3 (89-92)
18. Pobreza Integrada (MMIP)		68.5 (1984)	73.4	74.2 (1992)	n.d.	1.4 (84-89)	0.4 (89-92)

Para una explicación de los cálculos, véase Boltvink (2000, en prensa)

¿Qué pasa con vivienda y servicios? Observamos el mismo patrón que en educación. En la primera década (70-80) venía decreciendo muy rápido, en la segunda (80-90) sigue decreciendo pero a una velocidad de la mitad, y después, de 90 a 95, vuelve a recobrar velocidad e incluso supera la de los setenta.

En salud y seguridad social se repite sólo la primera parte de la historia: entre 70 y 80, rápido decrecimiento (no tan rápido como las otras dos), se desacelera igual entre 80 y 90; pero de 90 a 95 no sólo se sigue desacelerando sino que cambia de signo y la pobreza de salud y seguridad social aumenta justo en los años "gloriosos" de Salinas.

¿Qué pasó con la pobreza por ingresos, que es el concepto más usual de pobreza? En 1968 el 72% de la población nacional era pobre por ingresos; en los trece años que van del 68 al 81 se logra un descenso muy significativo de la pobreza, que baja más de 21 puntos porcentuales (una tasa media anual del -3.1%) para quedar en 1981 en 48.5%. A partir de entonces hay un cambio de signo y empieza un aumento brutal de la pobreza en los años ochenta. Entre 1981 y 1989 la pobreza crece desde 48.5% al 64%, un aumento de más de 15 puntos porcentuales y una tasa media anual del 3.5%. aunque entre 1989 y 1994 la pobreza de ingresos crece mucho más lentamente (del 64 al 66%), la nueva crisis de finales de 1994 hace que vuelva a crecer rápidamente la pobreza de ingresos. Si hacemos el cálculo para el período 1989-1996 esta pobreza habría pasado del 64% al 75%, 11 puntos porcentuales y una tasa media anual del 2.3%. La incidencia de la pobreza por ingresos en 1996 está en 75%, muy por arriba del dato de 1968. Estamos hablando de, prácticamente 30 años, tres décadas perdidas para el país en términos de esta dimensión del bienestar social.

La paradoja en la evolución de las pobrezas

Existe aquí una paradoja que requiere de una explicación: ¿Cómo es posible que, cuando estalla la gran crisis de la deuda y arrancan los gobiernos neoliberales en este país, cuyas políticas pauperizan a la población en términos de ingresos, las tasas de pobreza educativa, la de vivienda y servicios y, la de salud y seguridad social, sigan bajando?

Esta paradoja no es exclusiva de México, se ha presentado en otros lugares. El caso más sobresaliente es el de Chile, experiencia que se ubica cuando Pinochet convocó al plebiscito para decidir si se quedaba como dictador

o el país pasaba a un proceso de elecciones. Era el famoso referéndum del sí o el no. Como parte de las campañas por el sí y por el no, se armó una gran polémica en torno a lo que había pasado con la pobreza en Chile. El gobierno dictatorial mostró datos de lo que se llama pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), donde existía un descenso fuerte, de casi 20 puntos, en la pobreza por necesidades básicas insatisfechas.

Simultáneamente, la oposición, de manera prácticamente clandestina, logró una verdadera hazaña: consiguió una encuesta que había hecho el propio gobierno, la CASEN (Caracterización Socioeconómica Nacional), calculó la pobreza por ingresos y la comparó con una medición de CEPAL referida al 70; y la tendencia era exactamente la contraria. De acuerdo con los datos de pobreza por ingresos en Chile, éste había sido el país que más se había empobrecido en toda América Latina durante la década de los ochentas. En Chile el proceso de empobrecimiento había empezado desde los setenta. La pobreza había pasado del 17% en 1970 al 44% de la población en 1988.

Inclusive este aparente desfase se ha detectado en otras latitudes, fuera de América Latina, en los países anglosajones. Más que la evolución en el tiempo, lo que se ha puesto de relieve en los análisis de gran Bretaña e Irlanda es que no hay una correspondencia entre la pobreza de ingresos de cualquier hogar, con sus pobrezas educativas, en servicios de la vivienda o de salud. Es decir, la pobreza es un fenómeno heterogéneo y complejo: las carencias de los hogares son distintas porque tienen una historia distinta y porque su pobreza tiene un origen y una explicación distinta.

Una explicación lógica de por qué se da esta paradoja en nuestro país tiene que ver con el concepto central de *El Capital* de Carlos Marx: la mercancía. Cuando uno dice "pobreza por ingresos" estamos hablando de carencias como el hambre; de la gente que tiene que andar con harapos, que no tiene dinero para la más mínima necesidad de vestuario y de calzado y que probablemente no tiene para el transporte ni para pagar el combustible de la casa para cocinar, o le cortaron la electricidad. Hablamos de carencias humanas muy importantes y muy serias.

Este tipo de carencias, que se identifican por los ingresos bajos, expresan el no acceso a mercancías; la mercancía es algo que se compra, lo que en la terminología marxista podríamos denominar un valor de uso al que se tiene acceso a través del intercambio, un valor de uso comprado.

Cuando existe una crisis (cuando hay desempleo), cuando hay inflación y los ajustes a los salarios son menores a ésta, hay deterioro de los salarios reales. [Es importante señalar que la historia de América Latina está llena de países que vivieron en hiperinflación durante los años 50, 60, y en los 70, que no causaban estos deterioros salariales ni en los niveles de vida; al contrario, la pobreza se contrarrestaba porque tenían un sistema de indización salarial automático, y entonces, simplemente era un cambio de unidad de cuenta, la gente se acostumbraba a hacer las cuentas de otra manera, y los salarios se podían cambiar mensual, semestral, o anualmente]. Pero cuando hay una crisis y baja el poder adquisitivo de los ingresos, los ciudadanos tienen menor capacidad y compran menos bienes, los satisfactores básicos que tienen la forma de mercancía están sujetos a que la gente pueda obtener ingresos; cuando se rompe esa cadena, la satisfacción de las necesidades humanas cae abruptamente. Ese es el problema de que la satisfacción de las necesidades humanas dependa del mercado, dependa de su naturaleza de mercancías.

Una de las grandes virtudes de la política social nacional es que ha logrado (hasta ahora) evitar que la educación pública se convierta en una mercancía. La educación básica en nuestro país es básicamente gratuita (aunque crecientemente a través de las organizaciones de padres de familia se están cobrando cuotas) y el acceso de los niños a la escuela no depende de las fluctuaciones del bolsillo de sus padres, es lo que en la literatura de política social del mundo se llama desmercantilización. En términos de la terminología marxista se trata de un valor de uso social, producido por el Gobierno y transferido directamente para ser utilizado por los escolares. Sacar del mundo de las mercancías a ciertos satisfactores básicos es el instrumento principal de los estados de bienestar, de la política social universalista.

Lo que hace la política social neoliberal es mercantilizar lo que ya se había desmercantilizado, reconvertir en mercancías, bienes que habían dejado de serlo. El caso más clásico y actual: las cuotas en la UNAM. Con los 20 centavos de inscripción la educación superior en la Universidad era una "no mercancía", era un bien gratuito; al querer imponer sus cuotas intentaron convertirla en "mercancía". Este proceso además se está dando en muchos otros campos. Pero es muy importante ubicar este proceso en el tiempo. No es en los años ochenta cuando se mueve la política social hacia esta mercantilización de los bienes y servicios básicos.

Sabemos que en los años 80, además de la crisis general en la economía, y la enorme pauperización de la población, el Estado entró en crisis fiscal y

también se recortó el gasto público. Sin embargo, muchos autores han sostenido que esto también pasó con el gasto público social. Esto no era consistente con los datos de pobreza de educación, salud y servicios de la vivienda, que como hemos visto siguieron disminuyendo en la década de los ochenta.

Para efectos de los cálculos de pobreza específicas presentados en el Cuadro 1, yo trabajo con camas de hospital, con clínicas, con quirófanos, con consultorios, con médicos, es decir con los recursos materiales reales, así es como calculo la pobreza de salud. Y éstos crecen en los ochenta. Esos son los datos de salud que provienen de registros administrativos del sector público de atención a la salud. Pero los de vivienda, que son fuentes censales y que se pueden cotejar después periódicamente en encuestas de hogares, también mejoran; y los de agua, y los de drenaje, y los de electricidad; y los de educación: la matrícula crecía, los egresados crecían.

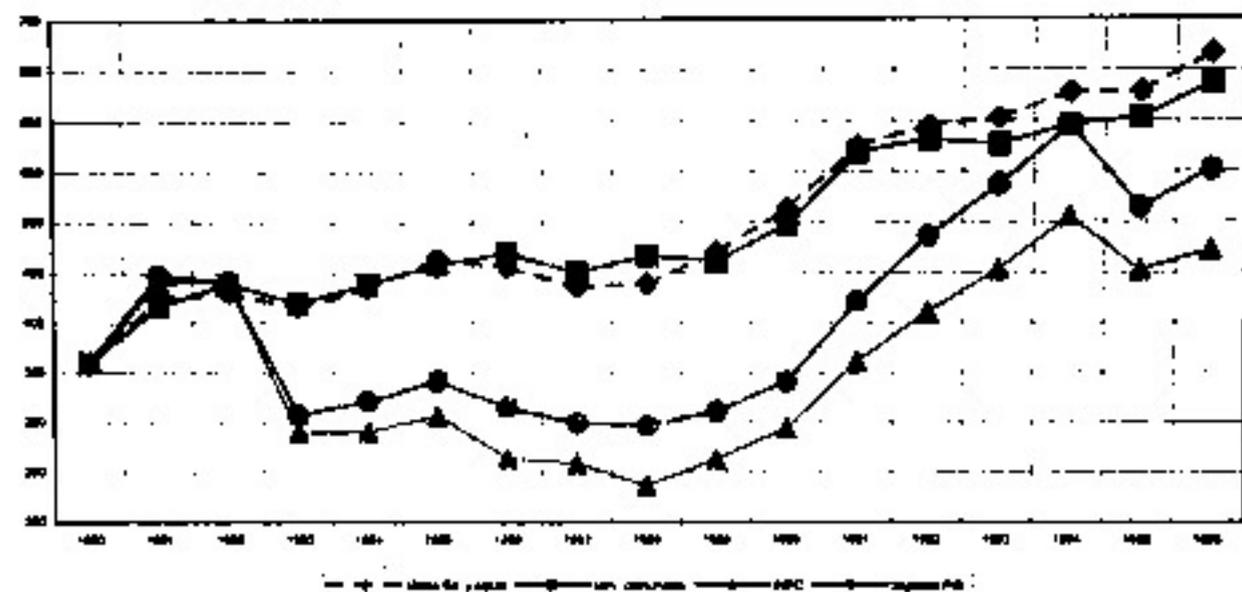
No era evidente el origen de la inconsistencia. Tardé un poco en identificarla. La inconsistencia se origina en el uso de un índice de precios incorrecto para transformar el gasto corriente en gasto a pesos de un año base (es decir pasar de lo que se llama precios corrientes a precios constantes). Es decir, estaban mal deflactados los datos del gasto público social (deflactar quiere decir dividir entre un factor inflacionario las series que están en precios corrientes, para ponerla en precios constantes de un año, y saber en términos reales si creció o no creció).

Muchos autores deflactan el gasto público social, con indicadores generales de la inflación en la economía. Esto es incorrecto porque el gasto público social no compra mantequilla, aceite, pan, leche; entonces, el Índice Nacional de Precios al Consumidor no sirve porque refleja el aumento de precios de los bienes que compramos los consumidores. Tampoco sirve el índice implícito de precios del PIB, que es otro que se usa para estos propósitos, porque ese refleja cómo se movieron los precios de toda la economía.

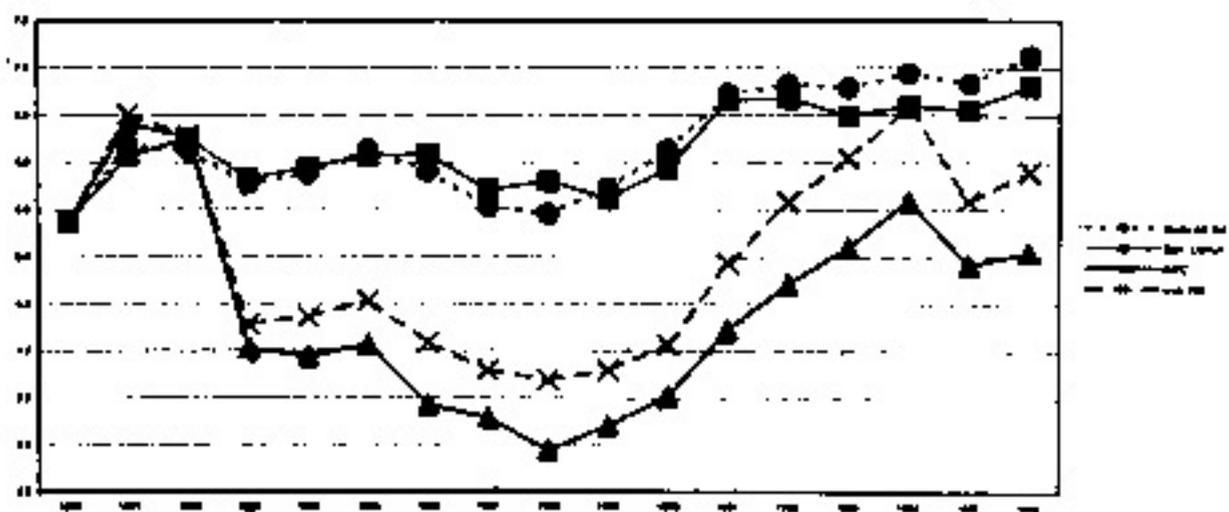
El gasto público social compra básicamente los servicios de profesores, enfermeras, médicos; paga sueldos y salarios y compra algunos bienes muy específicos: medicamentos, insumos hospitalarios, electricidad, gises, pizarrones, mesabancos.

En las gráficas 1 y 2 se presenta la evolución del gasto público social entre 1980 y 1996, expresado en precios constantes de 1980 según cuatro índices de precios diferentes. En la primera gráfica se presenta la evolución del

Gráfica 1: Evolución del Gasto social 80-98



Gráfica 2: Evolución del gasto social per cápita 80-98 con diversos índices



gasto social total) y en la segunda la del gasto social per cápita. Como se aprecia en la gráfica 1, el gasto social cae estrepitosamente en 1983 si se utilizan el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o el implícito del PIB (IPIB), que hemos dicho arriba que son inapropiados para este fin. Con el IPIB, el gasto fluctúa entre 1983 y 1990 en la banda entre 300 y 350 millones de nuevos pesos de 1980, cuando en 1981 y 1982 se acercó a los 450 millones de pesos. Es decir, el gasto total habría caído hasta en 33% entre 1981 y 1988. Con el INPC la caída habría sido incluso mayor en el mismo periodo (44.2%). Naturalmente, si observamos el comportamiento del gasto social per cápita (gráfica 2) con los mismos índices, las caídas son mucho más dramáticas: 0.43.3% con el IPIB y 0.54.1% con el INPC, en el mismo periodo. Es decir, el gasto per cápita prácticamente se habría reducido a la mitad en estas versiones, que como dijimos antes, son las usuales.

La evolución correcta, sin embargo, es muy diferente. En ambas gráficas esto puede verse en las series denominadas "media de los índices de consumo público en educación y salud" (abreviadas como media ed. y sal.) y el índice del PIB de servicios comunales (abreviado *serv. comun.*), que son las series a precios constantes calculadas sobre la base de índices de precios más adecuados a los bienes y servicios que se adquieren con el gasto social. En cuanto al gasto total, sólo se observan leves decrecimientos en tres años en cada serie. Pero incluso en 1988, considerado generalmente como el punto más bajo anterior al repunte de los años de Salinas, y que con los índices previos se ubica en el nivel más bajo de las series, el gasto social total es más alto que en 1982 o 1981. A partir de 1988 o 1989 el gasto crece en todas las series. En 1985, con la nueva crisis, se repite el fenómeno visto antes. El gasto público social decrece bruscamente si se mide con los dos índices generales (IPIB y INPC) pero se mantiene casi constante si se mide con los índices adecuados.

En cuanto al gasto social per cápita, la evolución es menos favorable incluso con los índices adecuados. El gasto social per cápita, en ambas series, llega a mínimos en 1988 o en 1989 que están por debajo de los niveles de 1981 y 1982 aunque por arriba de los de 1980. Sin embargo, la caída no implica una reducción a la mitad, sino sólo bajas de 9.7% en la serie basada en la media de educación y salud, y 10.1% en la serie de servicios comunales.

Concluimos que los resultados de las series con estos índices de precios específicos son consistentes con los hallazgos del Cuadro 1 en cuanto a la evolución de las pobrezas en educación, vivienda y salud y seguridad social. En efecto, dado que el Cuadro 1 presenta un análisis por decenios, si comparamos

el gasto social per cápita de 1990 con el de 1980, con cualquiera de los dos índices específicos, obtenemos un crecimiento positivo del gasto público aunque a un ritmo muy bajo (14% y 10.4% con nuestros dos índices), lo que corresponde con las bajas tasas de decrecimiento de la pobreza encontradas en el Cuadro 1 en la década 1980-1990.

En el periodo 80-90 el ajuste que hizo el sector público a sus finanzas tuvo dos características: en primer lugar, se hizo a costa de los sueldos y salarios de los médicos, los profesores, las enfermeras, etc., pero no se disminuyó el número de éstos. En términos cuantitativos, sin considerar la calidad, el producto educativo siguió creciendo. Lo que se desmanteló totalmente fue el aparato de fomento al desarrollo agropecuario, donde el gasto experimentó una caída brutal, y también se desmanteló la inversión pública en infraestructura básica: se dejaron de hacer carreteras, presas, aeropuertos y similares. Ahora el Banco Mundial no se explica por qué no crece nuestra economía, y muestra grave preocupación porque ha hecho de nuestro país si el ejemplo a seguir en materia de política basada en el llamado Consenso de Washington. En el Memorandum Económico de México de 1998, que se llama: *Impulsando la Productividad de los Factores en México*, destaca que es el deterioro de la infraestructura uno de los factores que explicarían este lento crecimiento (junto con el carácter incompleto de las reformas económicas realizado). Para el Banco Mundial sería necesario modernizar la infraestructura y completar las reformas económicas para que la economía crezca rápidamente.

Un tema muy interesante, en este sentido, sería explicar por qué las autoridades mexicanas hicieron el ajuste en el gasto público de la manera en que lo hicieron; porque en otros países de América Latina (como Chile o Perú), ante la presión de las finanzas públicas, se operó un ajuste brutal en el gasto social, cerraron escuelas, clínicas, despidieron profesores, cosa que no pasó en México. Éste es un fenómeno que hay que explicar porque, simultáneamente, fue también un mérito relativo de esos gobiernos que pudieron resistir la presión, a costa, claro, de dejar otros huecos en el presupuesto. Por eso, por esa forma de reaccionar del gobierno, la satisfacción de necesidades básicas, que no depende del bolsillo de la gente, sino del gasto público social, siguió disminuyendo en los 80.

Tomando como paradigma al período 70-80 en donde todas las pobrezas caen rápidamente (la de ingresos, la de educación), podemos decir que eso es resultado de una articulación virtuosa entre política económica y política social: ambas favorecieron el nivel de bienestar de la población, vía creación de empleos,

política salarial adecuada, crecimiento general de la economía y, obviamente, vía gasto público social.

En los 80 la política económica genera pobreza, pauperización; mientras, la política social resiste. En este periodo la política social se encontraba en un punto de resistencia en el que no se dismantelaron los rubros fundamentales (educación y salud e, incluso, se siguió haciendo algo de política de vivienda). Esta desarticulación genera un movimiento paradójico. Una de las reflexiones que uno se hacía en los 80, cuando estábamos en el principio de la crisis, era que aumentaría la tasa de mortalidad, sobre todo la infantil. Sin embargo, las estadísticas vitales de esos años arrojaron que la mortalidad infantil en el 83, y el 84 bajó. Recientemente he encontrado que hubo periodos importantes de estancamiento en la evolución de las tasas de mortalidad infantil, pre-escolar y escolar durante la década de los años ochenta.

Cuando hay un movimiento contradictorio en los bienestar que componen el bienestar humano en su conjunto (unos mejoran y otras empeoran) se ve sujeto a fuerzas que lo empujan en direcciones opuestas. El aumento de la pobreza de ingresos en los años ochenta jaló a las tasas de mortalidad hacia arriba; en cambio, la mejoría de los servicios de agua, drenaje, electricidad y educación, así como de la vivienda, presionaron las tasas de mortalidad; entonces, hubo un empate de estas dos fuerzas en la década de los 80, que contribuyó al estancamiento de las tasas de mortalidad de los grupos más jóvenes.

La articulación entre la política económica y la política social es un elemento fundamental si queremos mejorar el bienestar humano y no basta con una sola de las dos. Se dice que la mejor política social es una buena política económica pero, si sólo hacemos política económica, puede pasar que haya una fuerza hacia arriba y otra hacia abajo y que el bienestar humano termine empatado. Necesitamos una articulación virtuosa entre la parte económica y la parte social.

El dilema que tenemos es: nos movemos hacia un modelo de política social universalista, de ciudadanía social, de responsabilidad social del Estado para acercarnos hacia el modelo escandinavo o modelo socialdemócrata de bienestar, donde todo el mundo tiene garantizado un nivel de vida básico por el solo hecho de ser ciudadano; o nos vamos a seguir moviendo hacia el modelo neoliberal en la política social.

La esencia del modelo social-demócrata es que ningún bien o servicio básico depende del juego de las fuerzas del mercado; es un modelo básicamente desmercantilizado: el ingreso de las personas se garantiza por el Estado y no depende de las circunstancias del mercado de trabajo.

El modelo neoliberal que es el que prevalece en países como Estados Unidos, parte de la premisa de que la pobreza es culpa de los propios individuos. A diferencia del modelo socialdemócrata que la considera responsabilidad del funcionamiento del aparato social en su conjunto y, por eso, se les garantiza un ingreso. En las formulaciones más puras de la filosofía neoliberal; en Hayek, padre del neoliberalismo, o en Friedman, sólo se acepta la intervención del Estado para los casos de pobreza extrema.

Dentro de filosofía neoliberal existen dos excepciones en lo que respecta a la intervención del Estado, la primera es lo que llaman los "bienes públicos", entre ellos se cuentan la policía y la defensa nacional; éstos tienen que ser provistos por el Estado, ya que ambos garantizan la existencia del mercado, cuya lógica es "sólo recibe un beneficio quien paga".

La otra excepción que justifica la intervención del estado en la lógica del neoliberalismo, son los pobres extremos. Los neoliberales definen a la pobreza extrema como el grupo o sector social que no tiene los suficientes nutrientes para trabajar, es decir, el desnutrido. Este sector no tiene oportunidades y como los dos valores supremos del neoliberalismo son la libertad y la igualdad de oportunidades, este último valor se violaría si no se apoya a los pobres extremos. Entonces, se les proporciona alimentos para que puedan participar en el juego del mercado; una vez que esto ocurre, la responsabilidad económica recae en el propio individuo.

Sintetizando: los mexicanos tenemos que optar entre dos grandes modelos, esto no quiere decir que debemos, dogmáticamente, definirnos por uno solo de ellos. Sin embargo, los programas como PROGRESA, la reforma en el Seguro Social, la eliminación de los subsidios generalizados, el intento de imponer cuotas en la UNAM, etc., son ejemplos del movimiento de la política social mexicana hacia una política neoliberal, y es ésta la que precisamente debemos resistir. En México habrá que anteponer nuestra tradición del modelo revolucionario que era el que más se acercaba al modelo socialdemócrata.